

Experiencias de resistencia e incidencia política de la sociedad civil en la implementación y seguimiento a los PDET



Caribe
afirmativo



triángulo
cooperación



JUNTA DE ANDALUCÍA
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



**Experiencias de resistencia
e incidencia política de la
sociedad civil en la
implementación y seguimiento
a los PDET**

Experiencias de resistencia e incidencia política de la sociedad civil en la implementación y seguimiento a los PDET

Corporación Caribe Afirmativo

Director

Wilson de Jesús Castañeda Castro

Equipo de Investigación

Cristian de la Rosa

Betsy Charris de la Hoz

Ilustraciones y diagramación

Dani Brache Caballero

Experiencias de resistencia e incidencia política de la sociedad civil en la implementación y seguimiento a los PDET



Contenido

1. Abreviaturas	9
2. Introducción.....	11
3. Estrategia metodológica	13
4. Contexto en las subregiones y municipios.....	17
4.1. Contexto general.....	19
4.2. Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y Zona Bananera.	25
4.3. Montes de María	27
4.4. Sur de Bolívar	28
4.5. Sur de Córdoba	29
4.6. Urabá antioqueño	30
4.7. Catatumbo	31
5. Experiencias de resistencia e incidencia de sociedad civil.....	33
5.1. Sierra Nevada-Serranía del Perijá	33
5.2. Montes de María	36
5.3. Sur de Bolívar	37
5.4. Sur de Córdoba	40
5.5. Urabá Antioqueño.....	42
5.6. Catatumbo	44
6. Conclusiones	47
7. Referencias	49

1. Abreviaturas

AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ART: Agencia de Renovación del Territorio

LGBTIQ+: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer

OSIGEG: Orientación(es) Sexual(es), Identidad(es) de Género y Expresión(es) de Género

OCAD: Órgano Colegiado de Administración y Decisión

PATR: Plan de Acción para la Transformación Regional

PMTR: Pactos Municipales para la Transformación Regional

PCTR: Pactos Comunitarios para la Transformación Regional

RRI: Reforma Rural Integral

SN-SP-ZB: Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera

PDET: Programa(s) de Desarrollo Con Enfoque Territorial

PDT: Planes de Desarrollo Territorial

PGN: Presupuesto General de la Nación

2. Introducción

En el marco del proceso de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial¹, Caribe Afirmativo, con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo² y el apoyo de la Fundación Triángulo de España, construyó e implementó una estrategia que buscaba mejorar la participación de la sociedad civil, en especial, mujeres y personas LGBTIQ+ en la implementación, y en el seguimiento de los PDET de Montes de María, Sierra Nevada-Serranía del Perijá-Zona Bananera³ y Sur de Córdoba. Como parte de esta estrategia se consolida en el intercambio de experiencias entre subregiones, en las que además de las mencionadas anteriormente se incluyen Catatumbo, Sur de Bolívar y Urabá Antioqueño, en la que participaron líderes, lideresas, defensoras y defensores de DD.HH compartiendo las formas de incidir políticamente, construir paz y realizar ejercicios de control social a la implementación de los PDET, las cuales serán expuestas en este documento, que evidencian los mecanismos de participación con los que contó y cuenta la sociedad civil en la fase implementación y seguimiento de dichos PDET, así como, los retos y desafíos enfrentados en los últimos 4 años.

Como ya se mencionó, las experiencias sistematizadas tienen como población objetivos los grupos de mujeres y las personas LGBTI de las subregiones mencionadas anteriormente. En primer lugar, se presentará la metodología para la recolección de información y sistematización de las experiencias. Seguido a lo anterior, se expondrá las nociones de un contexto general de implementación y seguimiento de los PDET de cara a las realidades y dinámicas actuales de la subregión. A continuación, el tercer apartado la sistematización de las experiencias narradas por los líderes, lideresas, defensoras y defensores de DD.HH de cada una de las seis (6) subregiones centradas en la construcción de paz, incidencia política y control social. Finalmente, en el último apartado, se realizan algunas conclusiones y reflexiones del proceso investigativo.

1 De ahora en adelante PDET
2 De ahora en adelante AACID
3 De ahora en adelante SN-SP-ZN

3. Estrategia metodológica

Este informe de sistematización es un proceso investigativo que privilegia lo cualitativo, intencionado en develar desde las experiencias narradas por líderes y lideresas LGBTIQ+ y del movimiento de mujeres en la implementación y seguimiento de los PDET, los cuales son vistos como las herramientas para la transformación del territorio y consolidación de la paz, asimismo, la situación de derechos y las condiciones en seis (6) de las dieciséis (16) subregiones: Montes de María, SN-SP-ZN, Sur de Córdoba, Catatumbo, Urabá Antioqueño y Sur de Bolívar.

Para lograr este propósito se plantean tres objetivos específicos los cuales se materializan en los apartados que conforman este informe. El primero, referido a identificar los contextos subregionales en los que se dieron las fases de formulación e implementación de los PDET, y el proceso de seguimiento por la sociedad civil, reconociendo las dinámicas de mediación que se dieron de cara a la situación de violencia territorial, ausencia de voluntad política y otros fenómenos, tales como la corrupción, etc. El segundo busca reconocer, desde las experiencias de las personas LGBTIQ+ y mujeres, el actuar para garantizar la participación y el reconocimiento de sus grupos poblacionales en la implementación de los PDET, en consecuencia, ejercicios de priorización y toma de decisiones. Y, por último, un tercer objetivo busca recuperar y sistematizar las experiencias de las personas LGBTIQ+ y mujeres, alrededor de la construcción de paz, incidencia política y control social y ciudadano.

Por este motivo, el proceso metodológico se configura desde un enfoque fenomenológico con el cual se busca el reconocimiento de las personas LGBTIQ+ y las mujeres como sujetos de conocimiento, privilegiando estrategias de recolección de información cualitativa para rescatar las voces y el sentir de los actores-participantes, incluyendo las reflexiones del equipo de investigación.

Este informe se plantea con una mirada comunicativa horizontal de las y los participantes del proceso, rescatando sus discursos y sus experiencias. El proceso de investigación se configura en momentos o fases (ver figura 1), donde se vincularon diversas estrategias, fuentes (ver cuadro 1) y actores (ver tabla 1) en cada municipio.

Figura 1. Fases del proceso de investigación.



Fuente: Elaboración propia (2022)

Cuadro 1. Actores participantes, técnicas de recolección de información y estrategias utilizadas

Actores participantes	Técnica empleada	Estrategia implementada
Personas que se auto reconocen como LGBTI	Entrevistas semiestructuradas Grupos de discusión. Encuesta de percepciones.	Aplicación de técnicas interactivas y experienciales como: foto lenguaje, mural de situaciones, cartografías
Mujeres lideresas y/o activistas del movimiento feminista	Entrevistas semiestructurada Grupos de discusión. Encuesta de percepciones.	Aplicación de técnicas interactivas y experienciales como: foto lenguaje, mural de situaciones, cartografías

Fuente: Elaboración propia (2022)

Tabla 1. Balance de trabajo de campo según el tipo de actores participantes por subregiones y técnica de recolección de información empleada⁴.

Subregión	Personas LGB-TIQ+ en grupos de discusión	Entrevistas a personas LGB-TIQ+	Mujeres líderes y/o activistas en grupo de discusión	Mujeres líderes y/o activistas entrevistas
Montes de María	5	2	1	1
Sur de Córdoba	3	2	1	1
SN-SP-ZB	8	4	5	2
Sur de Bolívar	3	2	1	1
Urabá Antioqueño	2	2	2	2
Catatumbo	2	2	1	1
Total	23	14	11	8

Fuente: Consolidado de datos, trabajo de campo Caribe Afirmativo, 2022.

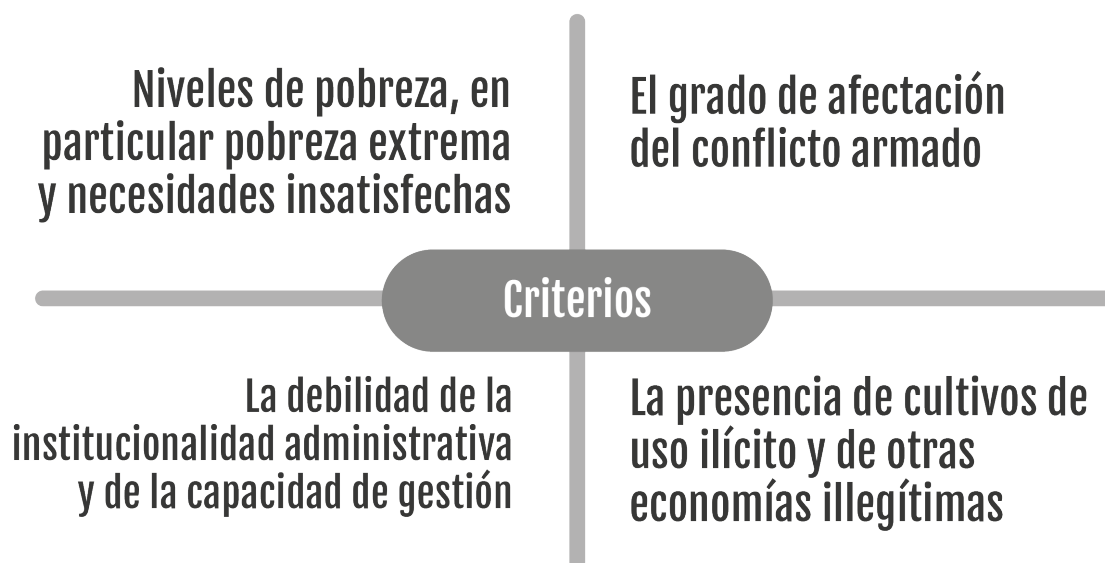
⁴ Las técnicas no fueron diseñadas ni implementadas con un carácter excluyente, como resultado de los grupos de discusión fue la posibilidad de seleccionar también las personas a entrevistar.

Las personas LGBTI y mujeres participantes de esta investigación fueron seleccionadas a través de una muestra intencional, no probabilística, con el apoyo de los participantes (líderes-lideresas-activistas) que han jugado un papel importante en el proceso de formulación, implementación y seguimiento de los PDET en las subregiones. Se tuvieron como criterios de selección de participantes los siguientes: hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes de las subregiones, participantes del movimiento de mujeres y/o feminista en sus territorios, que se auto reconozcan bajo alguna de las identidades LGBTIQ+ y participaran en los procesos de PDET o grupos motores.

Teniendo en cuenta la multiplicidad de territorios, el abordaje metodológico fue desde una perspectiva de interseccionalidad, partiendo que los ejercicios de incidencia política y construcción de paz se dan en dinámicas específicas y especiales categorizadas entre la opresión y el privilegio. Por ello, este análisis tiene como propósito “revelar” las variadas formas de incidir y mediar de líderes, lideresas, defensoras y defensores, y exponer diferentes vivencias que se dan en sus territorios.

4. Contexto en las subregiones y municipios

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, se dieron los primeros pasos para la Reforma Rural Integral (RRI) cuya finalidad es la reducción de la brecha de desigualdad en el campo y la ciudad, mediante el Decreto 893 de 2017 surgen los PDET, seleccionando 16 subregiones, 170 municipios y 11.000 veredas, lo equivalente al 36% del territorio nacional, y beneficiándose aproximadamente a 6,6 millones de colombianos. Los municipios fueron elegidos por cumplir con cuatro (4) criterios:



La formulación y construcción de los PDET se realizó durante el 2018, mediante la participación activa de las y los ciudadanos en encuentros desarrollados en veredas, municipios y en la subregión, construyéndose los PTCR, PMTR y PATR. La implementación de los PDET implicaría la armonización con las herramientas de planeación política del país, entre las cuales se encuentran los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los Planes Integrales comunitarios y municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), políticas públicas orientadas por el Plan Marco de la Implementación del Acuerdo (PMI), entre otras. No obstante, también estaría condicionada en la voluntad política, el músculo institucional de los municipios PDET y las dinámicas erigidas en el conflicto armado.

En este apartado se da a conocer el contexto socio territorial vigente que puede afectar a la implementación y el seguimiento de los PDET. Para ello es necesario iniciar con un breve diagnóstico de lo que ocurre a nivel nacional.

4.1. Contexto general

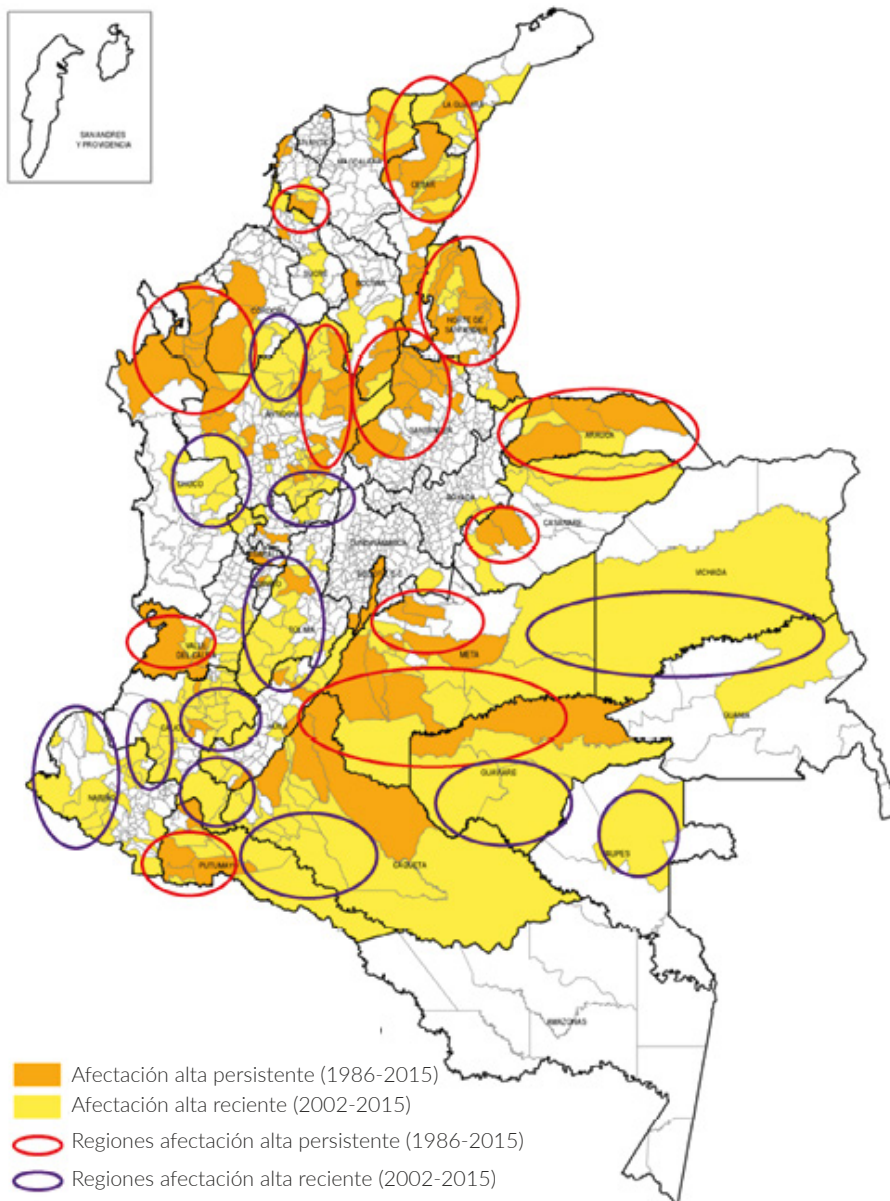
A partir del año 2019 se ha percibido el recrudecimiento de las violencias en Colombia, lo cual implica la persistencia violencia armada agudizada en algunas subregiones, en donde confluyen los actores, dinámicas y condiciones particulares. En Colombia no solo es posible hablar de un solo conflicto armado, sino de muchos conflictos armados que ocurre de manera paralela y coetánea, en ocasiones con dinámicas autónomas entre cada una de las subregiones.

En ese sentido, en muchas subregiones del país se presentan focos donde se configuran estructuras armadas ilegales y fuerza pública donde emergen dinámicas particulares. En la actualidad, estas dinámicas permeadas por procesos de reconfiguración, niveles de violencias o interconexiones, se fija en algunos escenarios porque “la actividad armada y la violencia de los actores del conflicto, configurando la territorialidad de espacios tipificados como zonas o corredores del conflicto armado en disputa y con afectación humanitaria” (Salas Salazar, 2016).

Entre el periodo 1985 y 2015, muchas de las subregiones que hoy hacen parte de este proceso de investigación fueron de suma importancia por el valor geoestratégico que se convertían para los actores armados del conflicto armado, fuese por: ser un corredor de movilidad, zona de protección y/o retaguardia, por la posibilidad de obtener ingresos económicos, o la configuración de todas las anteriores. Durante este periodo, es posible establecer que en Colombia existieron municipios con una afectación alta y persistencia continua del conflicto armado (véase figura 2) por ejemplo, al norte del país, el corredor de Catatumbo-Urabá fue de los más afectados, sobresaliendo: el Catatumbo, en la frontera con la República de Venezuela en Norte de Santander; la región del Magdalena Medio, Sur de Bolívar y nordeste antioqueño; El Bajo Cauca Antioqueño; la región del Paramillo en Córdoba y Antioquia; y las región del Urabá Antioqueño,

Otra zona con las mismas características fue el norte de Colombia, en la confluencia de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, donde se aprecia la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá. Más hacia el norte, próximo al litoral caribe, se destaca la región de los Montes de María, en los departamentos del Sucre y Bolívar. En estos territorios, la violencia fue aguda, lo cual en términos de victimización y en el derecho humanitario se tradujo en homicidios, desplazamientos, secuestros, masacres, despojo de tierras y desaparición forzada.

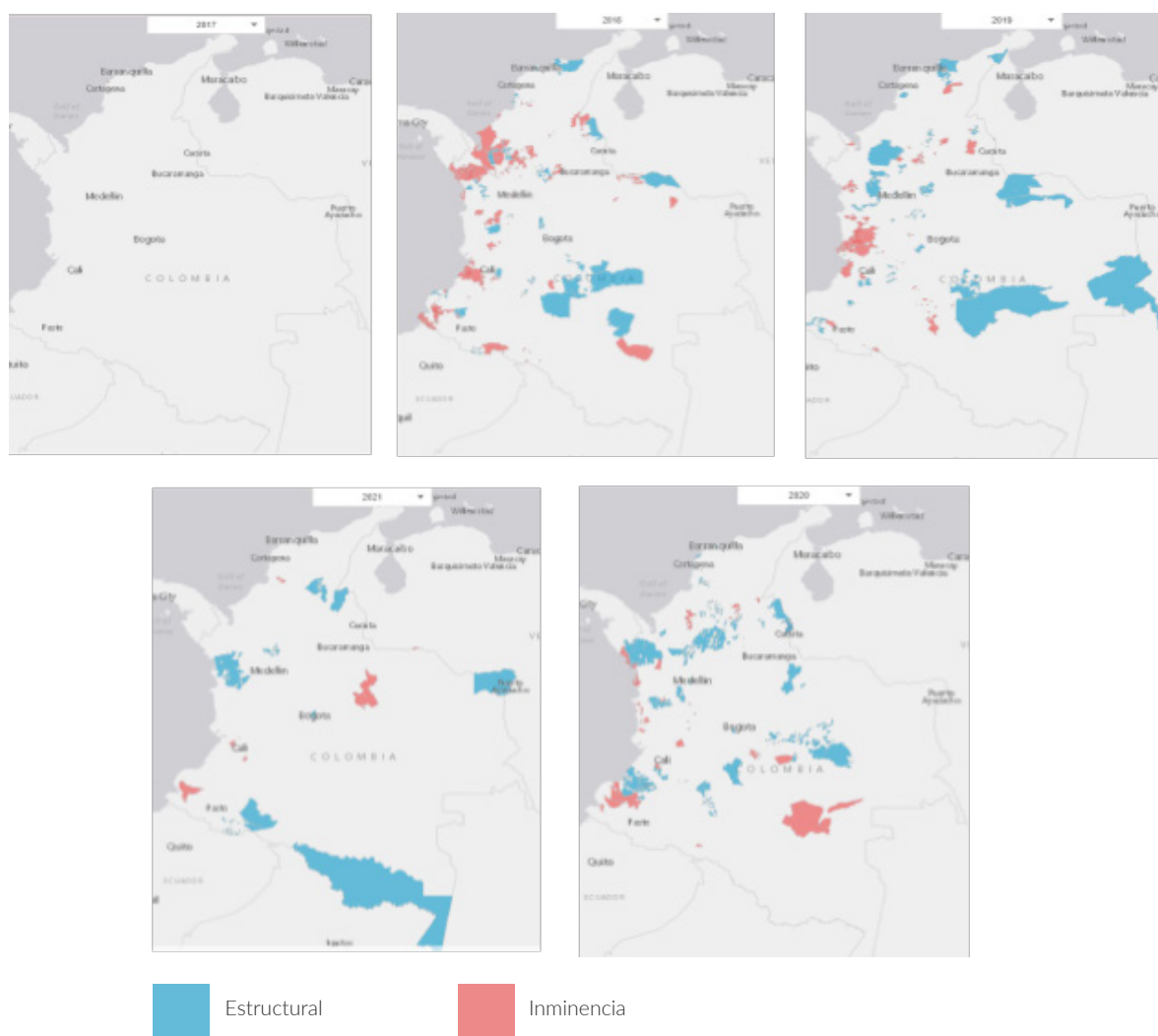
Figura No. 2. Tipología de municipios y regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia en el periodo 1986-2015



Fuente: Imagen extraída de la Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 26, núm. 2, pp. 45-57, 2016

Las dinámicas de violencias no han cesado, a pesar que el registro durante el periodo 2016-2017 planteó una reducción de las prácticas y conductas por actores armados ilegales. No obstante, a partir del año 2018 los registros de incidencia de actores armados ilegales fue creciendo, por ejemplo, en las subregiones como SN-SP-ZB y Sur de Córdoba con actores como AGC, AUG, o en el sur de Bolívar con ELN. El histórico de las violencias tras las firmas del Acuerdo de Paz sigue presentando que las subregiones no han cesado en muchas de las subregiones de estudio, por el contrario, ha habido un crecimiento de conflictos entre grupos armados y fuerza pública, pero también prácticas de medicación entre liderazgos (véase figura. 3).

Figura No. 3. Histórico de municipios y regiones reconocidos en el SAT por la presencia de actores armados en Colombia en el periodo 2018-2021



Fuente: Elaboración propia empleado el sistema de geolocalización del Sistema de Alerta Tempranas, 2022.

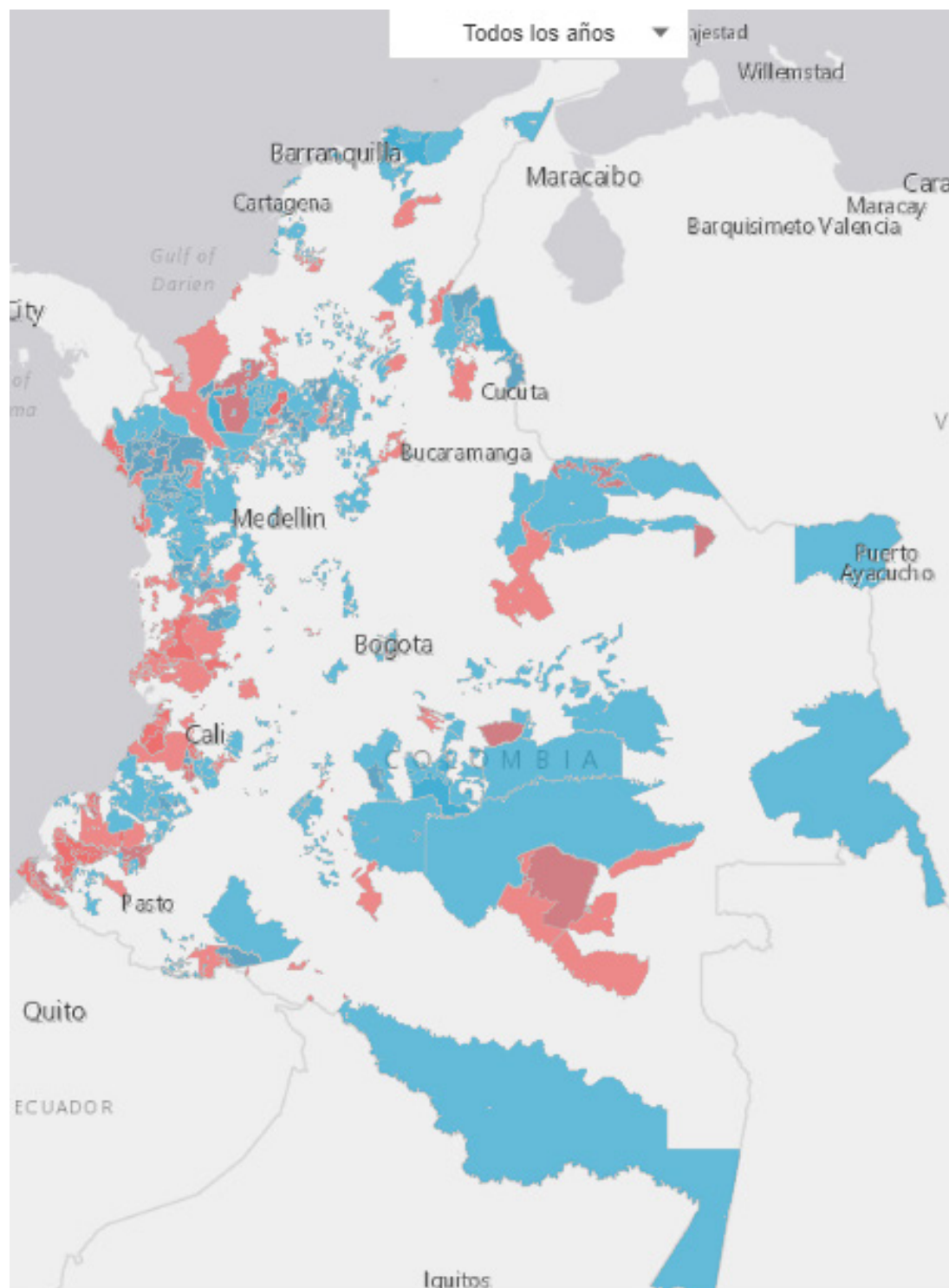
Dentro de este panorama, las personas LGBTIQ+ y mujeres han sido víctimas de violencias diferenciadas en el marco del conflicto, siendo reconocidas como sujetos de protección por la vulnerabilidad a la que se enfrentan en los territorios, como se ve reflejado en el mapa de geolocalización del Sistema de Alertas Tempranas. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha expedido entre 2018 y 2022, 10 alertas tempranas donde se reconocen las vulnerabilidades de personas LGBTIQ+ y de los activismos de mujeres, así como el peligro inminente por actores armados.

Estas dinámicas de violencias parcialmente tuvieron una recesión, sin embargo, en los últimos 5 años ha habido un crecimiento de estas violencias, identificándose en el Caribe Colombiano y otras subregiones:

- En la zona de los Montes de María se registran reportes de miembros del Clan del Golfo, quienes potencialmente han obtenido poder, generando la imposición de medidas de restricción de movilidad, amenazas a líderes y lideresas, y/o defensores de derechos humanos. El control militar y territorial permite establecer un crecimiento significativo como se reflejó en el paro armado del 2022.
- En el sur de Bolívar conflicto constante entre miembros del Clan del Golfo y el ELN, lo cual genera enfrentamientos entre ellos y el Estado, así como el posicionamiento de control hegemónico sobre las ciudadanías, amenazas a líderes y lideresas, y desplazamientos forzados.
- En el sur del Cesar se desarrolla un conflicto entre el Estado, la insurgencia de las FARC y el ELN han realizados ataques que causaron afectación de infraestructura vial y energética, ataques a la policía, amenazas y desplazamientos de las personas.
- En la Sierra Nevada de Santa Marta se presenta un conflicto de baja intensidad entre el Estado y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. No obstante, la ausencia de atención estatal ha generado un escalamiento de violencias que afectan principalmente a la zona rural de los municipios del Magdalena, asimismo ha llevado al crecimiento del conflicto con las Autodefensas Gaitanista del Colombia.

- En el sur de Córdoba se presenta un escenario de competencia armada entre el Clan del Golfo, Los Caparros y disidencias del frente 18 de las Farc-EP, lo que genera grandes afectaciones para la población civil que no participa del conflicto.
- En el Urabá Antioqueño se posiciona el Clan del Golfo como el actor hegemónico de este territorio, involucrado en el negocio del tráfico de migrantes y transporte de drogas ilícitas. Este grupo actúa como la ley en el territorio, tomando atribuciones para la “resolución de conflictos” estableciendo medidas, sanciones, multas y amplificando su control territorial.
- En la subregión del Catatumbo existe una confluencia de actores armados ilegales que luchan por controlar el negocio de los cultivos ilícitos en la frontera de Colombia con Venezuela. Se registra enfrentamiento de fuego cruzado entre guerrilleros del ELN y del EPL, además de otros actores armados por el control territorial.

Figura No. 4. Compilado municipios y regiones afectadas por actores armados en Colombia en el periodo 2018-2021



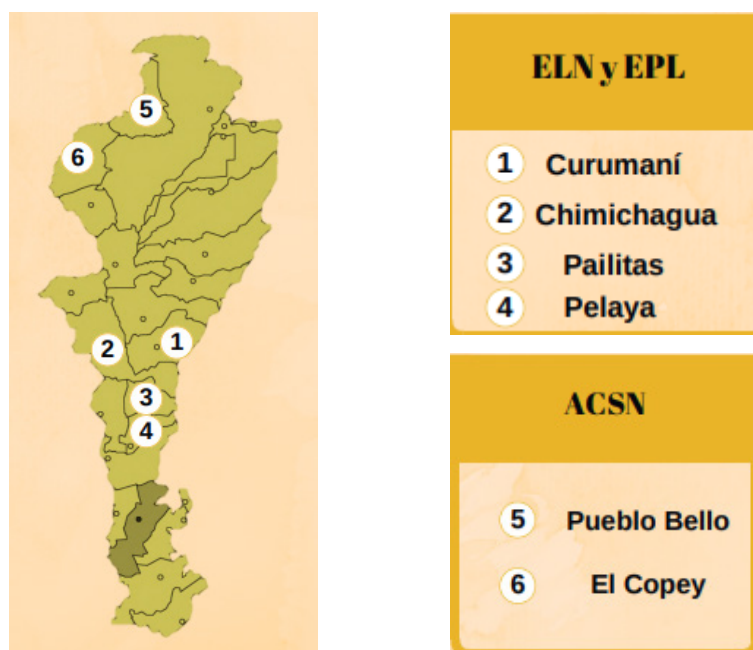
Fuente: Imagen extraída del sistema de geolocalización del Sistema de Alerta Tempranas, 2022.

4.2. Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y Zona Bananera.

De acuerdo, el Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe Colombiano del Centro de Pensamiento UNCaribe y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo enmarcan entre los años 2018-2020 fue destacable encontrar que el departamento de Cesar se ha identificado la presencia de disidencias de las FARC-EP desde el momento de las negociaciones del Acuerdo de Paz, y posterior a ellas. En muchos territorios del sur del Cesar ha habido confrontaciones con el ELN y fuerzas públicas. El Centro de Pensamiento UNCaribe postula la presencia del ELN en municipios como Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Pelaya, la cual se ha extendido al centro del departamento.

Por su parte, el sur de La Guajira presenta dinámicas contextuales similares al departamento del Cesar por la presencia del ELN. El 06 de enero del 2020 Frente Luciano Ariza realizó en Villanueva conmemoración de los 55 años de esa organización ilegal, controlando varias calles del municipio, instalando un retén ilegal y marcando las paredes de la sede de La Universidad de La Guajira y sobre algunos vehículos.

Figura 5. Actores armados en el Departamento de César



Fuente: Fotografía extraída de Reporte Especial: Presencia de actores armados en el Caribe. Trejos & Badillo (2020).

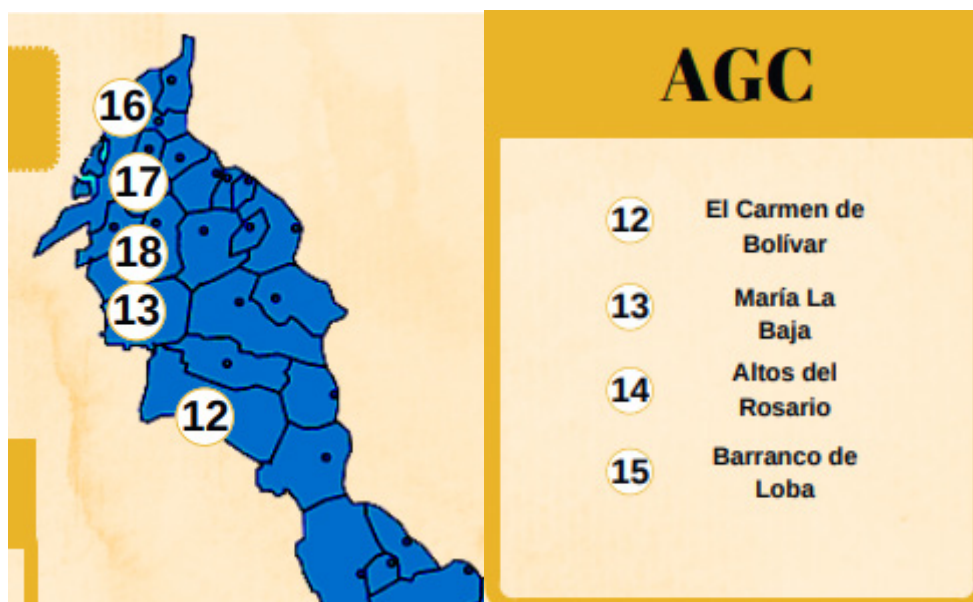
Por otro lado, también hay presencia de otros grupos armados AGC o el Clan del Golfo, junto con los Conquistador de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Conquistadores de la Guajira, quienes tienen injerencia en municipios de Albania, Barrancas, Fonseca, El Molino y Villanueva en La Guajira, como brazo armado de Los Pachencas.

En la zona rural de Maicao, se han visto afectados por grupos de delincuencia transnacional que tiene el control de los pasos irregulares que se encuentran y organizaciones criminales con modalidad 'outsourcing' de estructuras más grandes, sean estas insurgencia o grupos postdesmovilización, en los municipios de San Juan del Cesar y Uribia.

Por su parte el departamento del Magdalena, se ha visto permeado por la persistencia de economías ilegales relacionada con el narcotráfico y el microtráfico producto del posicionamiento de las AUG y los Conquistadores de la Sierra. Los continuos enfrentamientos entre las AUG y "Los Pachencas" (hoy los Autoconquistadores de la Sierra Nevada -ACSN) han provocado el desplazamiento forzado de habitantes de la zona rural, como fue el caso de Ciénaga, Magdalena donde a inicios del 2022, 80 familias fueron desplazadas.

4.3. Montes de María

Figura 6. Actores armados en los Montes de María.



Fuente: Fotografía extraída de Reporte Especial: Presencia de actores armados en el Caribe. Trejos & Badillo (2020).

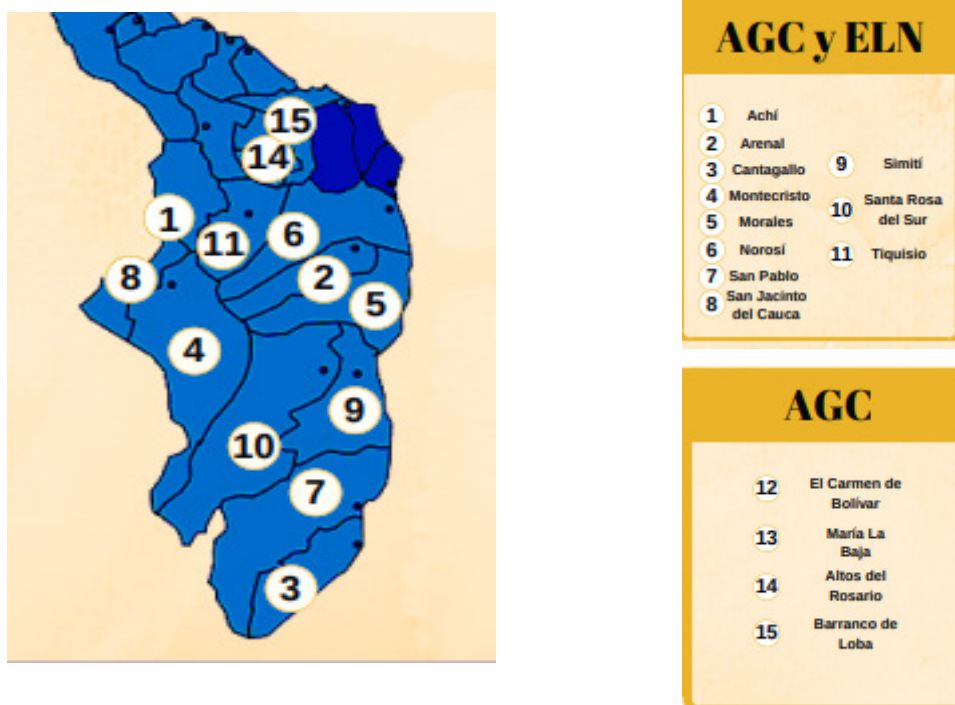
En los últimos años se ha reconocido la presencia y control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o también conocidas como 'Clan del Golfo' o 'Los Urabeños'. En la Alerta Temprana de Inminencia N° 051-18 ha establecido las AGC "logrado controlar los corredores de movilidad del mercado local y regional del narcotráfico, que le posibilitan transportar la producción de pasta básica de coca desde las zonas de cultivo (sur de Bolívar y departamentos vecinos) hacia los sitios donde se encuentran los laboratorios para la obtención de cocaína y de exportación hacia los mercados internacionales (a través del puerto de Cartagena)". El contexto de violencias presenta dinámicas de control territorial que se traducen en hechos victimizantes como amenazas a líderes y lideresas, desplazamiento forzado de comunidades de la zona rural y asesinatos selectivos.

4.4. Sur de Bolívar

El Sur de Bolívar es un territorio estratégico por encontrarse enclavado en la Serranía de San Lucas que bordea el río Magdalena, al nordeste antioqueño, el sur de César y el nororiente santandereano. Las condiciones ambientales y topográficas permiten cultivos de coca y el desarrollo de minería ilegal. “En esta subregión, el ELN hace presencia a través del Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro, “al cual están adscritos los frentes guerrilleros Edgar Amílkar Grimaldos, Héroes y Mártires de Santa Rosa, José Solano Sepúlveda y Alfredo Gómez Quiñones” (Tejos, 2019, P.27).

Luego de la desmovilización de las FARC-EP, en el Sur de Bolívar quedaron activos: el ELN y las AGC, las cuales tienen la imposición hegemónica sobre los territorios, en especial en zonas rurales. Si bien es cierto, tal como lo menciona Trejos (2020) habían establecidos una *pax mafiosa* por la cual una suspensión de las agresiones y no pisarse las mangueras, las dinámicas de violencia sigue persistiendo, y entre el 2021 y 2022 han aumentado por los enfrentamientos entre los mencionados, y estos con la fuerza pública.

Figura 7. Actores armados en el Sur de Bolívar.



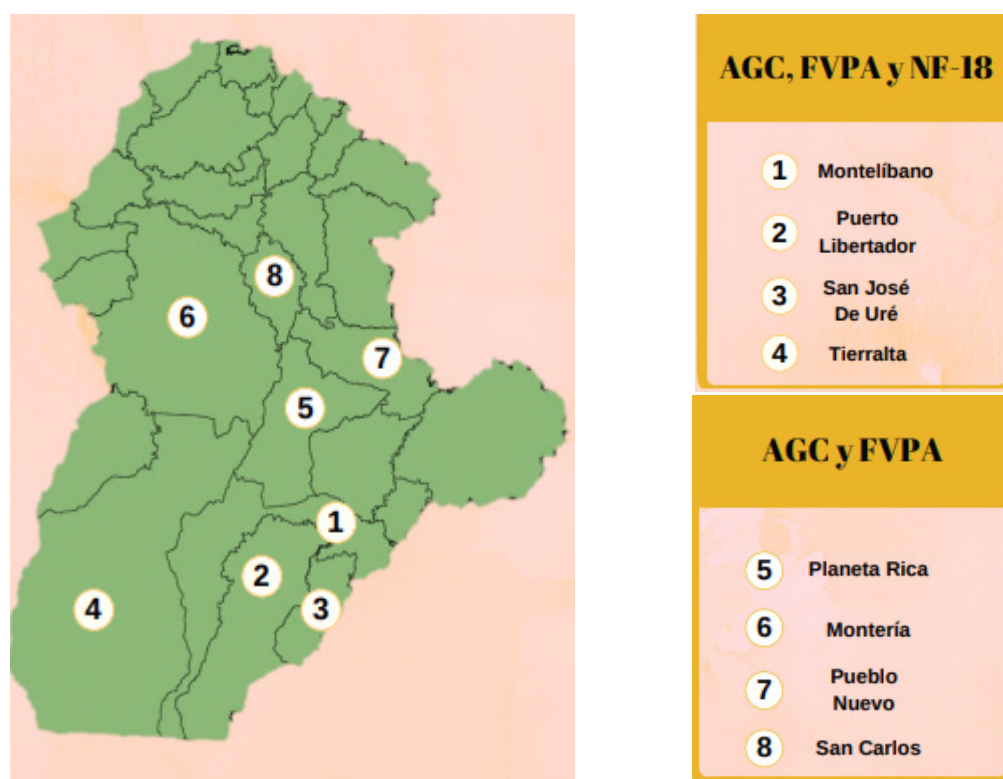
Fuente: Fotografía extraída de Reporte Especial: Presencia de actores armados en el Caribe. Trejos & Badillo (2020).

4.5. Sur de Córdoba

La situación de violencia en la Subregión de Córdoba ha llevado a que se expidan 14 Alertas Tempranas entre el 2018 y 2021 por la presencia de grupos armados ilegales ELN, EPL, Facciones disidentes de la FARC-EP, Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC), y grupos armados de Crimen organizado.

El Centro de Pensamiento UNCaribe, de la Universidad del Norte, realizó el reporte ‘La guerra ignorada en el sur de Córdoba: confrontación armada entre enero-septiembre del 2020’ reveló que, en los municipios del sur de Córdoba enfrentaron 12 acciones bélicas y 17 infracciones al DIH, lo que representa el 28,6 por ciento de las acciones bélicas (de un total de 32) y el 4,9 por ciento de las infracciones al DIH (de un total de 37) en todo el Caribe. Este mismo informe que “Los municipios más afectados fueron San José de Uré (47,1 por ciento de las infracciones al DIH) y Puerto Libertador (29,4 por ciento de las infracciones al DIH y 50 por ciento de las acciones bélicas)” (Centro Pensamiento UNCaribe, 2020)”.

Figura 8. Actores armados en los Montes de María.



Fuente: Fotografía extraída de Reporte Especial: Presencia de actores armados en el Caribe. Trejos & Badillo (2020).

4.6. Urabá antioqueño

El Urabá antioqueño se ha consolidado como una empresa criminal por su ubicación geográfica, al poseer 1.800 kilómetros de costa en el mar Caribe es llamativo para el negocio del narcotráfico para el transporte de sustancias a Centroamérica, Estados Unidos y Europa, y cruzando las selvas del bajo Atrato-Darién del departamento del Chocó, se puede llegar a Panamá por tierra también se llega a Centroamérica.

El Clan del Golfo es el actor que se posesiona en el territorio, quienes se dedican al narcotráfico, pero también al tráfico de migrantes, de tal manera, se ha consolidado *“La Ruta de los Migrantes Ilegales en Urabá”*, por la cual son traídas personas desde lugares como: Sierra Leona, Pakistán, Guinea, Somalia y Nepal situados en Asia y África para llegar a Sudamérica, ingresando a puertos no autorizados en el Urabá.

Este grupo trabaja de la mano con bandas criminales y organizaciones de coyotes. El control territorial que tiene el Clan del Golfo permitió que en mayo del 2022 declararan paro nacional, generando un ambiente de zozobra y deteniendo la movilidad dentro de departamentos como Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Antioquia, esto se debe que a diferencias de otros actores armados, estos tienen relaciones con grupos armados locales permitiéndoles realizar acciones desde la distancia, atemorizar a la población de cascos urbanos y generar la sensación de coordinación logística de carácter nacional.

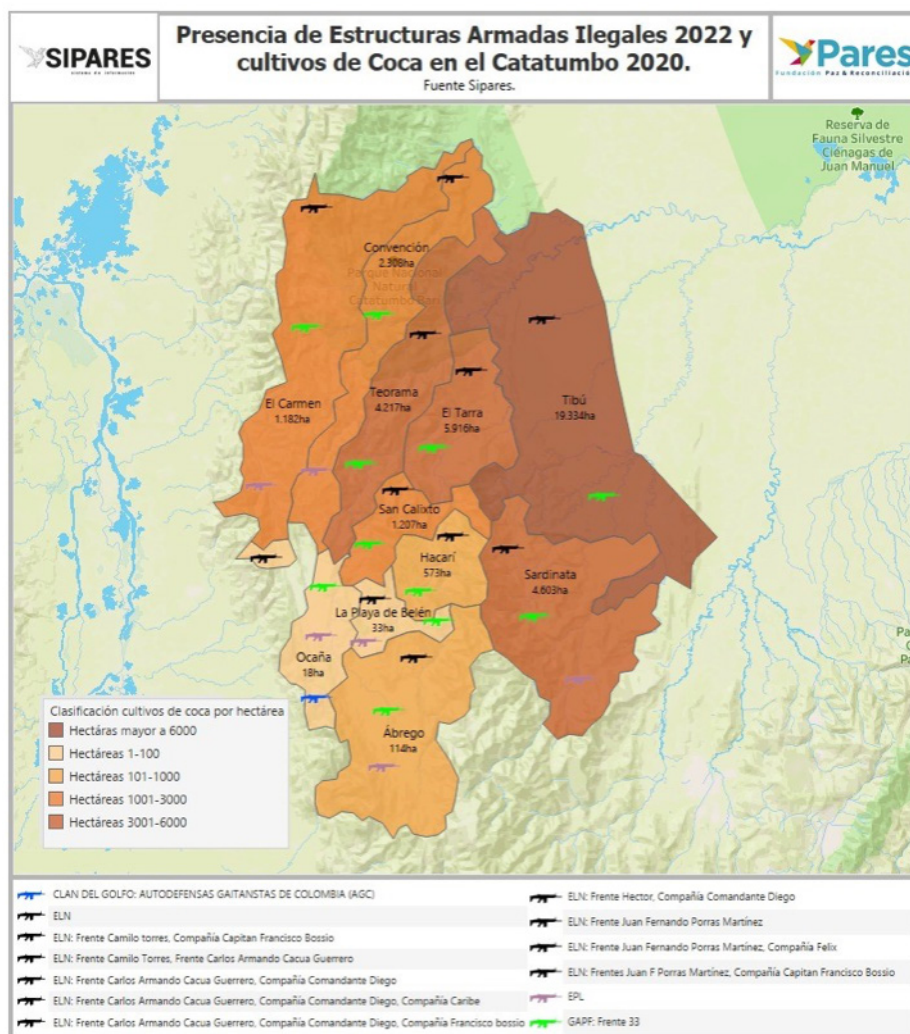
4.7. Catatumbo

La subregión del Catatumbo se encuentra en la disputa perpetua por las economías ilegales, sobresaliendo la producción, procesamiento y comercialización de la hoja de coca. Es posible identificar que en estas dinámicas participan actores armados que controlan la zona, según la Oficina de las Naciones Unidas contra el Droga y el Delito (2020) participan cinco estructuras del ELN, y el Grupo Armado PostFarc (GAPF) Frente 33, quienes utilizan a los municipios como un fortín para sus actividades militares y económicas, especialmente, Tibú, Teorema, Convención y El Tarrá.

“En la región del Catatumbo las dinámicas del mercado fueron diferentes al resto de territorios, (...) las condiciones locales no afectaron la circulación de compradores en la zona, por lo cual los precios de la pasta básica de cocaína permanecieron estables durante la pandemia (alrededor de COP 2.400.000 por kg)” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2021, pág. 17). Esto toma relevancia al tener en cuenta la frontera colombo-venezolana que se ha convertido en un eje estratégico para las redes de narcotráfico.

El conflicto armado ha permeado la población civil, pues se establecen reglas por los actores armados que implica el sistema de permisos-multas, la prohibición de la sustitución de cultivos de uso ilícitos, so pena de ser asesinado, cobro de impuestos económicos y afectación de los proyectos de vida, pues en el caso de los y las jóvenes siempre deben tener conocimientos químicos para la transformación de la hoja de coca.

Figura 9. Actores armados en Catatumbo



Fuente: Sipares & Observatorio de Drogas de Colombia (2022)

5. Experiencias de resistencia e incidencia de sociedad civil

5.1. Sierra Nevada-Serranía del Perijá

“Los PDET han sido una frustración. Lo único que vemos es cemento, pero cero transformaciones. Nos enfrentamos a socializaciones que no es participación efectiva, donde al final solo se sientas jugar con los sueños. Estamos lejísimos de una implementación efectiva para mujeres y personas LGBTIQ+ donde las voces de las y los campesinos sean verdaderamente escuchados. [Pero aún] Hoy nos enfrentamos a grandes retos, uno de ellos ¿Cómo hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y los PDET sin que no maten? (Testimonio lideresa del movimiento de mujer, 2022).

La Subregión de Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera está compuesta por 3 departamentos, 15 municipios. En el departamento del Magdalena se encuentra Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta; por su parte en Cesar hace parte Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar; y en La Guajira Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar. Esta subregión es una de las que tiene un desafío fuerte en su implementación, pues requiere la articulación de tres gobernaciones e implementar iniciativas del PATR cuyos beneficios está en todos los territorios.

En esta subregión quedaron configuradas 2.135 iniciativas y del total de iniciativas de la subregión 182 iniciativas cuentan con marcación de Mujer Rural y Género y 164 iniciativas propias étnicas. Dentro de los PDT 2020-2023 fueron 844 iniciativas, de las cuales 90 tienen marcación de mujer rural y género.

A través del OCAD PAZ se han aprobado 101 proyectos por \$1.126.011 millones, en 15 municipios PDET (La paz, Codazzi, Santa marta, Ciénaga, Manaure, Fundación, Pueblo bello, Aracataca, La Jagua de Ibirico, Fonseca, Becerril, San juan del cesar, Dibulla, Valledupar y San diego), asociados a 106 iniciativas. La inversión total de los 102 proyectos en esta subregión asciende a \$1.133.851 millones, y género, por \$103.753 millones.

Por Obras PDET ha habido una inversión en 113 proyectos por la suma \$23.722 millones, de los cuales 77 están terminados/entregados, por \$16.375 millones y 36 están en ejecución, por \$7.347 millones. De los mencionados 7 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$1.396 millones. Por último, del Trazador regionalizado del PGN para la vigencia 2021 existen 3 proyectos que tienen clasificación de mujer rural y género, por \$18.412 millones.

En la subregión se identificó que existe falta de información y pedagogía hacia la población civil sobre los PDET, es decir, a las comunidades no se les ha hablado sobre: ¿Qué son los PDET? ¿Cómo surgen?, ya que por parte de las administraciones locales sólo se suministra información de algunas obras que se han ejecutado, pero existe mucha información que la población civil desconoce, esto dificulta que se entienda el propósito de los PDET y a la vez, dificulta la incidencia y control social por parte de la ciudadanía. Por parte de las administraciones locales no se ha dado una correcta inclusión del enfoque de género, por parte de las administraciones locales pues hay un desconocimiento de este, y la población incluida en este enfoque suele estar dentro de lo normativo, es decir solo mujeres cis, excluyendo las diversidades sexuales como mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

El Gobierno Nacional no ha garantizado la vida de líderes y lideresas por la paz, así como los acuerdos de paz y la inclusión del enfoque de género en las iniciativas PDET. Es necesario mencionar que en muchos territorios persisten las acciones violentas y las disputas territoriales entre actores armados ilegales, lo cual ha dado paso a la continua ruptura del tejido social, que progresivamente dificulta la construcción de paz en los mismos, la garantía de los derechos humanos y la reparación de las víctimas.

Es decir, se debe fortalecer la participación política en la implementación de los PDET por parte de las administraciones locales, que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo funcionan los programas y cuál es el impacto esperado, a la vez realizar pedagogía para que la ciudadanía tenga conocimientos sobre control social y veeduría ciudadana. En ese sentido, la ciudadanía reconoce la falta de inclusión en el seguimiento y control social de los mismos, sobre todo el enfoque de género es muy limitado y no logra incluir a las personas con OSIGEG diversas.

En esta subregión se han dado dos ejercicios importantes de control social, las veedurías “MADIPAZ” y “ACCIONES DE PAZ” ejecutada por distintas organizaciones de la sociedad civil, se le ha hecho seguimiento a la implementación del enfoque de género en los acuerdos de paz. Estas veedurías vienen haciendo seguimiento en la implementación del Acuerdo de Paz y los PDET con enfoque de género, promoviendo incidencia en el reconocimiento de riesgos de corrupción lo cual ha permitido realizar alertas antes las autoridades de control sobre desviación de recursos.

Otra buena práctica ha sido la incidencia con la ART y Grupos motores para aumentar el número de mujeres participación en los escenarios y permitir que sus voces se manifiesten en la toma de las decisiones. Este ejercicio ha estado acompañado de la articulación del movimiento de mujeres con prevalencia de mujeres rurales, según los participantes se está incidiendo en la expedición de una directriz para garantía de paridad en instancias de participación, así como estrategias para que sean reconocidos otros municipios del departamento del Magdalena.

En los departamentos de Cesar y La Guajira ha habido un ejercicio interesante de empoderamiento de mujeres rural para reconocimiento de los territorios diversos, existiendo una articulación con el movimiento indígenas y afro para promover la perspectiva interseccional en la implementación del PDET.

La ciudadanía de la subregión de Sierra Nevada-Perijá se pregunta, ¿Qué se debe hacer para garantizar la implementación del enfoque de género en los PDET?, ¿Qué estrategias se van a tomar como mujeres y personas LGBT para que el gobierno nacional implemente el enfoque de género? Dado que los programas llevan 4 años y hasta el momento, es baja la cantidad de obras ejecutadas con enfoque de género, teniendo en cuenta que este debe ser transversal e incluir a las personas con OSIGEG diversas.

Para cerrar en esta subregión la pedagogía para divulgar la información relacionada a los PDET es insuficiente, lo cual ha dificultado el ejercicio del control social, así como que se pueda tener incidencia para que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial logren sus objetivos de forma garante y transversal.

5.2. Montes de María

La Subregión de los Montes de María está compuesta 7 municipios del departamento de Bolívar y 8 del departamento de Sucre los cuales fueron seleccionados como municipios de PDET. Los municipios son: María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Onofre, San Jacinto, Zambrano, Toluviéjo, Ovejas, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos, Palmito, y Córdoba. En esta subregión se establecieron 2.931 iniciativas, del total 538 iniciativas cuentan con marcación de Mujer Rural y Género.

En cuanto a proyectos PDET, cuya fuente de financiamiento es el OCAD PAZ existen 46 aprobados por \$514.523 millones, del total 6 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$30.192 millones. Asimismo, se han desarrollado obras por impuestos siendo aprobados 5 proyectos en 10 municipios PDET, asociados a 11 iniciativas. También se han aprobado 115 proyectos de Obras PDET por \$21.730 millones, de los cuales 57 están terminados/entregados, por \$7.874 millones, 25 están en ejecución, por \$5.920 millones, 30 están estructurados, por \$7.413 millones, 3 están en estructuración, por \$523 millones. Del total de proyectos de esta fuente de financiación 3 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$300 millones.

Los participantes de esta subregión han manifestado la importancia de la presión e incidencia para el reconocimiento dentro del enfoque de género de personas LGBTIQ+. Estos ejercicios iniciaron en la formulación del PDET, pues el movimiento LGBTIQ+ recurrió a otros movimientos sociales para el posicionamiento de la agenda de diversidad sexual y de género, cuyo resultado fue tener varias iniciativas priorizadas a nivel regional y municipal.

Asimismo, los procesos de sensibilización y formación a funcionariado público han permitido colocar en discusión el espectro del enfoque de género, y generar relaciones cercanas con la institucionalidad. El uso de las estrategias comunitarias ha sido empleado para la transformación de los imaginarios sobre personas LGBTIQ+ y hacer aperturas ser seleccionadas personas en iniciativas productivas del PDET.

Una buena práctica ha sido conseguir representativa en la Mesa de Víctima y en los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, lo cual ha facilitado un avance en el pilar 8 del PDET, así como, posicionar iniciativas de género en la calidad de “Detonantes y dinamizadoras”, es decir, de alta relevancia para la subregión por la conexidad de actores.

5.3. Sur de Bolívar

“Tristemente, en nuestros territorios existe una tendencia de paralizar o desacreditar la existencia de este. En particular, [la estrategia] que nos ha funcionado es presionar, recurrir a las leyes, en ese momento comienzan a tambalear. Se empiezan a sentir incómodos. Lo digo por experiencia porque lo viví y estuve frente con él, cuando empezamos a mencionarle leyes que proteja a la población LGBTIQ+, le cambió el semblante. Así hemos conseguido las victorias. (Testimonio líder de Sur de Bolívar. 2022)

En la subregión del Sur de Bolívar está conformada por los municipios de Arenal, Morales, Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo. En esta subregión quedaron fijadas 1.052 iniciativas, del total de iniciativas de la subregión 118 iniciativas cuentan con marcación de Mujer Rural y Género, se incluyeron en los PDT 568, estando 72 con marcación de mujer rural y género.

A la fecha se han aprobado 29 proyectos por el OCAD PAZ por \$363.634 millones, en 7 municipios PDET (Arenal, Simití, Yondó, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Morales y San Pablo), asociados a 49 iniciativas, existiendo 1 proyecto con clasificación de mujer rural y género por \$6.018 millones. Como obra PDET se ha realizado 4 proyectos con clasificación de mujer rural y género, por \$1.599 millones.

Se han ejecutado proyectos producto ART, 2 proyectos por \$1.089 millones, siendo 1 de mujer rural y género por la suma \$511 millones, y 10 proyectos de intervención territorial de los cuales 8 están dirigidos a mujeres rurales.

El proceso de formulación de los PDET en esta subregión no tuvo en cuenta la participación de ciudadanía LGBTIQ+, lo cual se ha traducido en una limitada aplicación del enfoque de género, el cual no es de carácter transversal. Esta percepción limitada del enfoque de género ha sido identificada por todos los participantes de las subregiones participantes en el proceso de investigación, lo cual es muestra evidente de la implementación del enfoque de género desde la óptica transversal y que, a la vez, se analice desde la interseccionalidad, teniendo en cuenta las condiciones como el género, las OSIGEG diversas y etnias.

La subregión registra un aumento la fuerza de los actores armados ilegales quienes constriñen y amenazan a líderes y lideresas que en su mayoría de estos trabajan con víctimas y comunidades de los territorios a través señalamientos y sentencias de muerte en panfletos. Según los participantes provenientes de esta subregión, realizar actividades de liderazgo en el sur de Bolívar es firmar

una sentencia de muerte, dado que los actores armados que tienen presencia en los territorios rechazan toda acción que signifique debilitar sus dinámicas violentas. Teniendo en cuenta que se han presentado casos de vulneración a derechos humanos en la subregión, aun así, no hay presencia de la Defensoría del Pueblo en los territorios. En su defecto, los casos son remitidos a la subregión de Magdalena Medio.

Desde al año 2017, se han tenido en la subregión asesinatos selectivos de jóvenes, los cuales en su mayoría han quedado inconcluso, hasta abril del 2022 se habían reportado el asesinato de 4 jóvenes casos de “limpieza social” por parte de actores armados que tienen presencia en la zona, cabe mencionar que esta práctica se caracteriza por realizar asesinatos selectivos por un tiempo y posterior a esto, hay periodos en los que hay ausencia de los mismos. En el municipio de Santa Rosa, hubo un desplazamiento forzado de las comunidades que vivían en la zona, como resultado de la disputa territorial entre los actores armados ilegales, con el fin de ejecutar control social y territorial.

En la subregión se han evidenciado violaciones a derechos a personas que ejercen liderazgos sociales principalmente sobre el seguimiento e implementación de los PDET, personas LGBT y víctimas del conflicto. Históricamente, en las zonas rurales se han asentado los actores armados, sin embargo, la disputa territorial actual en la subregión, ha dado paso a que algunos de sus integrantes se desplacen al casco urbano, afectando directamente a las comunidades y sus condiciones de vida.

De hecho, siguiendo Trejos y Badillo (2022) en el sur de Bolívar la violencia contra la población civil no desapareció, pero sí se volvió más selectiva, los actores armados ilegales que se asientan en el territorio han asesinado a líderes comunitarios, además han impuesto confinamientos y constantes amenazas a la población civil. Además, no se tienen garantías para la protección de derechos y prevenir amenazas y asesinatos hacía líderes y lideresas, dado que en los territorios de la subregión hay poca presencia de la fuerza pública, por ejemplo, en el territorio de San Pablo hay solo 9 policías, teniendo en cuenta la alta cifras de amenazas y asesinatos por parte de actores armados.

Esta persecución que viven los líderes comunitarios en asuntos PDET puede deberse a una buena práctica desarrollada en los municipios y sus corregimientos. A diferencia de otras subregiones, en el Sur de Córdoba, las Juntas de Acción Comunal juegan un papel fundamental en la implementación de los PDET, en especial, las constituidas en corregimientos, puestas son las dinamizadoras de las necesidades territoriales y de la implementación de los PDET, asumiendo a su vez, el rol de la figura de los grupos motores que se registran en otras subregiones. Es por ello que, según los participantes ha habido un aumento de amenazas a líderes comunales y desplazamiento.

Por otro lado, en temas de ejecución de obras y participación al igual que otras subregiones como el Sur de Córdoba, la ciudadanía manifestó incorrecta administración de recursos, ya que, al momento de ejecutar obras, por parte de la administración local no se tienen recursos necesarios, existe una debilidad manifiesta, la participación de los ejercicios de priorización son limitados, y la ejecución de una obra está condicionada de las dinámicas de los grupos armados, quienes son la ley en los municipios.

5.3. Sur de Córdoba

“En el Sur de Córdoba, específicamente en el municipio de Montelíbano, cuando se conformaron de estas mesas para la construcción del PMTR, las personas LGBTIQ+ nunca fuimos llamada y ya nosotros estamos constituidos como organización, a pesar que desde el 2018 venimos haciendo incidencia política en el territorio. Entonces, estos espacios de participación nunca fueron abiertos a la población LGBTIQ+ en Montelíbano. Y por esa razón, no hay iniciativas dentro del desarrollo de proyectos. No sé porque tiene la creencia [las instituciones] que los PDET solo van a mujeres, indígenas y afros”. (Testimonio de líder de Sur de Córdoba, 2022)

Frente a la distribución territorial el 52% de los habitantes de la subregión viven en la cabecera de los municipios y el 48% es rural, lo cual implica 95 la cantidad de veredas en las que se coinciden en el PDET y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que facilita la implementación de los Planes Integrales de Desarrollo Alternativo (PISDA) de los PDETS y otros planes estratégicos. La situación de violencia en la Subregión de Córdoba ha llevado a que se expidan 14 Alertas Tempranas entre el 2018 y 2021 por la presencia de grupos armados ilegales ELN, EPL, Facciones disidentes de la FARC-EP, Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC), y grupos armados de Crimen organizado.

Esta subregión cuenta un total 1222 iniciativas PDET, de las cuales 138 iniciativas cuentan con la marcación de Mujer Rural y Género y 343 iniciativas propias étnicas. Fueron incluidas dentro de los PDT 571 iniciativas y 75 fueron marcadas en la categoría de mujer rural y género.

En estos años de implementación, se han aprobado 32 proyectos PDET por \$370.563 millones, se han tramitado OCAD PAZ 8 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$96.779 millones. La ART aprobó e implementó 4 proyectos por \$2.449 millones, los cuales están terminados. Del total de proyectos de esta fuente de financiación 1 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$563 millones, y se ha realizado 10 Proyectos de Intervención Territorial por la suma \$3.720 millones, 9 tienen clasificación de mujer rural y género, por \$2.386 millones.

En cuanto al enfoque de género en la implementación de los PDET ha evidenciado desafíos en términos de inclusión real de personas con OSIGEG diversas, en principio desde la ART, la cual ha manifestado en varios espacios que en el Sur de Córdoba no hay implementación de iniciativas LGBTIQ+, ni se tampoco se benefician pues en la zona rural no hay personas OSIG diversas.

De hecho, la ciudadanía LGBT participante manifiesta que, en la subregión del Sur de Córdoba, las relaciones entre las administraciones locales y la ciudadanía es distante, lo cual ha dificultado la participación política de la ciudadanía en la implementación y ejecución de obras. Por otro lado, la presencia de actores armados ilegales en los territorios, sobre todo en las zonas rurales ha obstaculizado el ejercicio de liderazgo sociales, por lo que la ciudadanía LGBT que vive en la zona ha optado por limitar y ocultar sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

En territorios como Montelíbano, la participación política y el ejercicio de veedurías ciudadanas que ejerce la ciudadanía LGBT ha sido en su mayoría apoyada por procesos de cooperación internacional, dado que por parte de la administración local ha sido difusa la inclusión de personas con OSIGEG diversas en los PDET. En los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador los ejercicios de control social se han fortalecido por la articulación con organizaciones como SINERGIA, la cual ha permitido realizar seguimiento a los PDT, en consecuencia, a los PDET y PMTR, mediante la elaboración de planes de trabajo y estrategia de incidencia política para la priorización de iniciativas para mujeres y personas LGBTIQ+.

Por otro lado, la ciudadanía expone que la manera en la que pueden hacer parte de la participación política es a través del uso de acciones constitucionales como acciones de tutelas, ya que es la forma en la que la administración local puede dar respuesta a las solicitudes realizadas. Esto permite entender que por parte de la institucionalidad no se evidencia voluntad de incluir a la ciudadanía en los procesos de participación política y seguimiento a PDET y demás programas de interés general.

Al igual que las demás subregiones, la ciudadanía manifiesta que, en muchos de los territorios, hay presencia de ciudadanía diversa en los procesos de participación política, sin embargo, la forma en la que se llevan a cabo estos procesos tiene objetivos políticos, así como orientado a llenar cuotas. Por otro lado, hay territorios en los que en los procesos de implementación de PDET no incluyen de ninguna forma a la ciudadanía y los grupos motores, lo cual dificulta el proceso, dado que siguiendo a ART (s.f) la base de los PDET está en las comunidades y los Grupos Motor, como delegados en sus territorios, se han convertido en la voz de estos municipios.

A pesar de los obstáculos que se han enfrentado, los líderes y lideresas se han articulado con otras instancias de participación y asumida representación de estas, una de ellas la mesa de víctima. En esta instancia, quien funge como representante de personas LGBTIQ+ decidió ingresar en el plan de trabajo de la mesa, realizar jornadas en las zonas rurales, lo cual ha permitido la identificación de personas LGBTIQ+ en la zona rural para que estos sean partícipes de los grupos motores y beneficiarios de la implementación de PDET. Sin embargo, este ejercicio es realizado con mucho cuidado pues los actores armados pueden tomar represalias contra estos.

5.5. Urabá Antioqueño.

La subregión de Urabá Antioqueño está conformada por 8 municipios del departamento de Antioquia: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeida, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo. En esta subregión quedaron consolidadas 1.641 iniciativas, del total de iniciativas de la subregión 105 iniciativas cuentan con marcación de Mujer Rural y Género. En los PDT se incluyeron en los planes de desarrollo territoriales 623. De estas últimas, 50 tienen marcación de mujer rural y género.

En proyectos PDET gestionados por el OCAD PAZ Se aprobaron 26 proyectos por \$234.722 millones, en los 8 municipios PDET asociados a 32 iniciativas, dentro de los anteriores se gestionó 1 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$28.234 millones. Se han aprobado 59 proyectos por \$14.147 millones como Obras PDET los cuales todos fueron terminados o finalizados, siendo 3 de esta clasificación de mujer rural y género, por \$712 millones. Se han realizado 6 proyectos productivos por \$5.186 millones y 8 intervenciones territoriales por \$4.766 millones. Por último, dentro del trazador Paz PGN se municipalizaron 10 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$19.092 millones.

En la subregión de Urabá se han evidenciado continuamente casos de violencia. En territorios como Apartadó hay enfrentamientos entre individuos (jóvenes en su mayoría) para controlar barrios (barreras invisibles), los cuales en su mayoría funcionan como milicias de actores armados ilegales presentes en el territorio. En ese sentido, se han evidenciado varios casos de asesinatos a jóvenes, los cuales están relacionados a la decisión de salirse de las dinámicas ilegales y violentas de las que suelen ser reclutados forzosamente.

En la zona rural (veredas) de algunos territorios de la subregión como Apartadó hay presencia de actores armados ilegales, en estos territorios, los actores armados ejecutan dinámicas ilegales como el narcotráfico y el microtráfico reforzando otras prácticas como el reclutamiento y la movilización masiva de jóvenes y mujeres para que trabajen en los cultivos de coca.

Por otro lado, en los territorios se han presenciado casos de amenazas y rechazo hacia personas con OSIGEG diversas y migrantes venezolanos en el territorio de Chigorodó y Apartadó. En la subregión, la ciudadanía LGBT no tiene garantías de sus derechos y se le ha solicitado al proceso de los PDET seguridad a líderes y lideresas, asimismo se percibe falta de participación de la ciudadanía en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, por lo que se evidencia la falta de compromiso y articulación por parte de las administraciones locales.

De hecho, siguiendo a El Espectador (2021) señaló que en territorios como Apartadó la implementación de los PDET tiene dos caras, por un lado, las obras han generado importantes cambios en sus comunidades, sin embargo, la ejecución de otras obras está demorada y las administraciones locales no priorizan los proyectos que la comunidad considera priorizar. La otra cara, es una socialización del PDET los tuvieron en cuenta, como una estrategia de socialización mientras que en el proceso de ejecución han sido invisibilizados.

En conclusión, en la subregión de Urabá, la presencia de actores armados ilegales ha dificultado los procesos de liderazgos y el seguimiento de los PDET en los territorios. Además, la falta de garantías y la constante vulneración de derechos hacia líderes, lideresas, personas LGBT y migrantes ha dado paso a que la comunidad se abstenga de realizar ejercicios de control social.

Se debe mencionar que se evidencia falta de articulación entre las administraciones locales y la ciudadanía cuando de ejecución de obras PDET se trata, por lo que se espera que las comunidades y las personas con OSIGEG diversas puedan tener mayor inclusión y participación en la implementación de los PDET, asimismo que las obras se ejecuten con enfoque de género sobre todo, que las sugerencias, recomendaciones y necesidades básicas insatisfechas sean escuchadas, con el fin que los programas logren el objetivo de impulsar desde diferentes ámbitos el desarrollo en territorios y comunidades afectadas por el conflicto armado.

Los participantes plantearon que como estrategias de incidencia política ha funcionado procesos de articulación entre el movimiento LGBTIQ+ y el movimiento de mujeres. Asimismo, los procesos comunitarios que se desarrollan en torno a la prevención de enfermedades infectocontagiosas que han llevado a colocar en discusión en las mesas de participación la agenda de género. Como resultado del proceso articulado ha sido la victoria de un proyecto PDET que fue ejecutado por organizaciones de la sociedad.

En esta subregión ha jugado un papel fundamental las Juntas de Acción Comunes de los corregimientos como los dinamizadores en la implementación de los PDET, pues muchos de los corregimientos y veredas quedan a grandes distancias del casco urbano, por consiguientes, las asociaciones veredales y delegaciones de representaciones permiten la concertación y priorización de acciones. Eventualmente, estos ejercicios distan del control social, pues en el casco urbano existe un sistema impositivo por actores armados de permisos y multas.

5.6. Catatumbo

La subregión esta conformada por 8 municipios del departamento de Norte de Santander, los cuales son: Convención, El Carmen, Tarrá, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. En el PATR quedaron fijadas 1.115 iniciativas, estando 278 iniciativas cuentan con marcación de Mujer Rural y Género. Del total de iniciativas fueron incluidas en los planes de desarrollo territoriales 362., y de estas últimas, 88 tienen marcación de mujer rural y género.

En esta subregión ha habido una inversión en proyectos PDET alta, por el OCAD se han aprobado 30 proyectos por \$215.237 millones, en 8 municipios PDET, de estos solo 7 tiene categoría de mujer rural y género. Por la modalidad obras PDET se han aprobado 156 proyectos por \$30.528 millones, de los cuales 154 están terminados/entregados, por \$29.514 millones, 2 están en ejecución, por \$1.013 millones, 14 de estos proyectos son de mujer rural y género. Por el Trazador Regionalizados de PGN hay municipalizados 24 proyectos, del total de proyectos de esta fuente de financiación 19 proyectos tienen clasificación de mujer rural y género, por \$30.319 millones. Esta subregión es una de las más importantes para la cooperación internacional, contando con un total de 4 proyectos, 2 en ejecución y 2 en fase de estructuración.

Estos territorios cuentan con una situación de derechos humanos preocupante, lo cual afecta a los procesos de implementación del PDET. Vale aclarar que a pesar de ser una de las subregiones con mayor inversión social, 3 de los 8 pilares carecen de presupuesto suficiente para la implementación.

El posicionamiento de los actores armados ha condicionado los territorios por el control hegemónico, a tal punto que se ha impartido socialmente el mensaje de no causar daño a los y las ciudadanas, salvo que se rompan las reglas impuestas por estos. Como ocurre en otras subregiones, se ha instaurado un sistema impositivo de permisos y multas, ninguna persona externa o institución puede ingresar a la zona rural sin previo permiso, y ejercer con plenitud ejercicios de control social. Nuevamente, las Juntas de Acción Comunal han sido la instancia participativa para exigir derechos y el cumplimiento de compromisos fijados en los PDT y PDET.

El realizar ejercicio comunitario para la construcción de paz es posible por los procesos de mediación que se realizan con los grupos armados, pero hablar de los derechos de personas LGBTIQ+ o posturas en contra del patriarcado es imposible. Por otro lado, existe una situación preocupante de salud pública relacionada al trabajo sexual ejercido por personas LGBT locales y migrantes, asimismo se han reportado casos de violencia hacia personas con OSIGEG diversas en municipios como Tibú.

La estrategia manifestada por los líderes y lideresas implica emplear la cultura para la transformación del territorio. Por parte de la administración local, no se ha tenido inclusión de ciudadanía LGBTIQ+ en la implementación y ejecución de obras PDET, a la vez, al igual que en la subregión de Sierra Nevada-Perijá, hay mucho desconocimiento de los PDET en el territorio.

Conclusiones

A partir de lo anteriormente presentado a lo largo de este documento, se exponen las siguientes conclusiones.

1. La primera conclusión que salta a la vista es las dificultades a las que se enfrentan los líderes y lideresas de los municipios y subregiones que participaron en el espacio. Los territorios han tenido un aumento significativo en violencias por parte de los actores armados ilegales. En las zonas rurales, la participación del Estado es casi inexistente o nula, permitiendo que estos grupos al margen de la ley, sean autoridad y ley para resolución de conflicto.

En ese mismo sentido, la implementación de los PDET y las RRI está condicionada a la sustitución de cultivos de uso ilícito y la macro-criminalidad que se encuentra posicionada en el territorio, pues no existen garantías para la sociedad civil de estar un territorio conforme a sus proyecciones.

2. El proceso de implementación de los PDET viene presentando retrasos debido a la escasa articulación con los municipios que hacen parte de las subregiones. A pesar que algunas subregiones como Catatumbo o Montes de María, las cuales han sido priorizadas, los avances no son percibidos por la sociedad civil, siendo cuestionado el avance a nivel subregional cuando los procesos de articulación entre departamentos, capitales de departamentos y municipios, y municipios con corregimientos y veredas sigue siendo difícil. A tal punto que los avances en la implementación de los PDET, está asociado al cumplimiento de los PMTR y no del PART.
3. Persiste un desconocimiento por parte de los líderes y lideresas sociales municipales sobre el proceso de implementación de los PDET en sus territorios que no han permitido realizar un ejercicio de control adecuado sobre lo que se ha implementado, principalmente por dificultades para acceder a la información y el temor a represalias por parte de actores armados ilegales. En algunas subregiones, el ejercicio se ve sesgado por la dificultad de acceder a los territorios rurales, pues las medidas de permisos-multas implica que quien comanda el territorio sea el que dispone el tiempo y la permanencia en estos. Es recurrente cuestionarse: ¿Cómo se habla de transformación regional, si siguen existiendo las mismas conductas de violencias?

En segundo lugar, la mayoría de los líderes y lideresas considera que el nivel de participación de la sociedad civil en el proceso de implementación. No es posible hablar de participación efectiva, si de parte de la institucionalidad lo único que se garantiza son escenarios de aprobación por medio de una socialización. A diferencia del proceso de construcción y formulación, la implementación de los PDET ha sido completamente cerrada.

4. En esa misma línea, ¿Cómo hacer control social si es prácticamente imposible alzar las voces? Esta discusión fue un tema de discusión por parte de los líderes y lideresas, ¿Cómo hacer control social sin que nos maten? En los territorios PDET las garantías son limitadas y las autoridades han concentrado las acciones de la implementación desde los cascos urbanos y capitales de departamentos. Los líderes y lideresas coinciden en que existe una desconexión entre lo que se habla por parte de instituciones como la ART y ANT.

Esto mismo, conlleva un debate interno sobre la “transformación regional” que se reduce a obras de cemento, pero una apuesta deficiente frente a la equidad regional, entre el campo y la ciudad, y de género. En los territorios rurales, a cuatros años de la firma de los PDET siguen existiendo las mismas necesidades, y peor aún, sigue estando en una tierra sin dueño porque el catastro multipropósito y la titulación de tierra parece un sueño de no cumplirse.

5. El debate sobre el género sigue abierto para los líderes y lideresas participantes, pues a su percepción el enfoque no es transversal y las instituciones como la ART lo siguen percibiendo como una cuota de mujeres dentro de iniciativas. La definición de un enfoque que evalúa la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres parece falaz, porque en este escenario de implementación lo que se ha logrado ha sido a las estrategias de incidencia de los movimientos sociales, especialmente, de personas LGBTIQ+ quienes han sido invisibilizados por una postura cis-heteropatriarcal.

Referencias

- Agencia de Renovación del Territorio (2022). Ficha Técnica Subregión Urabá Antioqueño.
- Agencia de Renovación del Territorio (2022). Ficha Técnica Subregión Catatumbo
- Agencia de Renovación del Territorio (2022). Ficha Técnica Montes de María.
- Agencia de Renovación del Territorio (2022). Ficha Técnica Subregión Sur de Bolívar.
- Agencia de Renovación del Territorio (2022). Ficha Técnica Subregión Sur de Córdoba
- Agencia de Renovación del Territorio (2022). Ficha Técnica Subregión Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y Zona Bananera.
- Bula A., Castañeda, W. & Hawkins, C. (2019) Territorios y diversidad: la defensa del colectivo LGBTI a través de las fronteras. La cooperación transfronteriza para el desarrollo, p. 145.
- Caribe Afirmativo (2019). Contra la pared: Situación de derechos humanos de las personas LGBT en el Caribe colombiano 2009-2019.
- Caribe Afirmativo (2022A). Informe de derechos humanos de personas LGBT en el Caribe Colombiano del 2022.
- Cordorbexia (2020). Informe de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz Territorial en el sur de Córdoba en el año 2020.
- DANE. (2020). Nota Metodológica Déficit Habitacional CNPV 2018. Recuperado el 1 de diciembre de 2020, de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/deficit-habitacional/deficit-hab-2020- nota-metodologica.pdf>
- Defensoría del Pueblo (2018). Alerta Temprana de Inminencia N° 051-18
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 (Bogotá: UNODC-SIMCI, 2021).
- Rosero, L. T., & Sarmiento, R. B. La guerra ignorada en el sur de Córdoba: confrontación armada entre enero-septiembre del 2021.
- Salas-Salazar, L. G. (2016). Conflicto armado y configuración territorial: elementos para la consolidación de la paz en Colombia. Bitácora Urbano Territorial, 26(2), 45-57.

- Trejos, L., y Badillo, R. (2020). Los cuatro conflictos del Caribe colombiano: balance de la confrontación armada durante el primer semestre del 2020. Barranquilla: Centro de Pensamiento UNCaribe, Universidad del Norte.
- Trejos, L. (2020b). Situación de los actores armados en el Caribe colombiano: del orden armado a la anarquía criminal. Bogotá: Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ
- Trejos, L., Badillo, R. Irreno, Y. (2019a). El Caribe colombiano: entre la construcción de paz y la persistencia del conflicto. JURÍDICAS CUC, 15(1). 9-46. <http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01>
- Trejos, L., & Badillo, R. (2021). Pandemia y conflictos armados en el Caribe colombiano: Informe sobre la violencia armada en el 2020 (Pandemic and Armed Conflict in the Colombian Caribbean: A Report on Armed Violence in 2020). Available at SSRN 3773263.



Experiencias de resistencia
e incidencia política de la sociedad civil en la
implementación y seguimiento a los PDET

  @caribeafirmativo  @caribeafirmativ

www.caribeafirmativo.lgbt